RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CINCUENTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 38-2006-00371

Realizando una revisión del expediente, se encuentra que:

1.La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Bogotá ESP a través de apoderado interpuso demanda de expropiación en contra de la señora Alcira Rodríguez Alfonso respecto del bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-1079024 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad.

2.Trámite en el que el 6 de julio de 2007¹, se emitió por parte del Juzgado 38 Civil del Circuito de esta ciudad, sentencia que resolvió:

“1. Decretar la expropiación del predio ubicado en la Transversal 14 C Este No. 54 C-40 Sur, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-1079024 de esta ciudad, alinderado en la resolución No 0187 del 23 de marzo 2006 y en la pretensión primera de la presente demanda.

2.***ORDENAR** el registro de esta sentencia y del acta de entrega en la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad, en el folio N° 50S-1079024, para lo cual se libraré el oficio respectivo, para lo cual se deberá anexar a sí mismo copia de la resolución y de la demanda en donde conste los linderos.*

3.*Ordenar la cancelación de los gravámenes, embargos e inscripciones que recaigan sobre el bien objeto de expropiación. Ofíciase.*

4.*Tener como avalúo del inmueble, el practicado para efectos de la negociación directa, contenido en el Informe Técnico de fecha 8 de mayo de 2003 elaborado por la Sociedad Colombiana de Avaluadores de Bogotá.*

5.*Tener como valor de la indemnización a favor de la demandada, el del avalúo indicado en el numeral anterior y ordenar su entrega si no se hubiere hecho, una vez registrada la sentencia y el acta.*

6.*Sin costas.”*

3. Determinación que fue revocada en sus numerales 4 y 5 por parte de la Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad a través de sentencia del 3 de agosto de 2009² en virtud del recurso de alzada interpuesto por la demandada, para en su lugar:

*“**SEGUNDO.** Para determinar el valor del inmueble expropiado y las indemnizaciones a favor del demandante <sic> se **ORDENA** en los términos que establece el artículo 456 del C de P.C. la práctica de un dictamen pericial, como se indicó en la parte motiva. El juzgado A-quo procederá de conformidad con las normas vigentes al respecto.”*

¹ Folio 277 a 282

² Cuaderno No. 3

4.El 13 de noviembre de 2009, la instancia judicial en comento emito bajo las disposiciones del art. 362 del Código de Procedimiento Civil, auto de obedecer y cumplir lo dispuesto por el superior.

Del relato procesal enunciado no cabe duda entonces que el valor de la indemnización a reconocer a favor de la demandada Alcira Rodríguez Alfonso en razón a la expropiación del bien inmueble objeto del litigio, debe ceñirse a los parámetros que para el efecto establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil.

Prerrogativa normativa cuyo desarrollo lo definió el Tribunal Superior de Bogotá en auto de fecha 21 de abril del año 2010³, en donde indicó:

*“...establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil que “el juez designará peritos que estimarán el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados”, **lo que necesariamente obligaba el nombramiento de dos (2) especialistas para hacer el avalúo. Por eso el inciso 2° del artículo 25 del Acuerdo 1518 de 2002, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, precisa que “en los procesos de expropiación uno de los peritos deberá ser designado dentro de la lista de expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi” (se resalta), todo lo cual está en consonancia con el numeral 6° del artículo 62 de la Ley 388 de 1997, a cuyo tenor la indemnización que el juez decreta “tendrá en cuenta el avalúo comercial elaborado de conformidad con lo aquí previsto”, más concretamente con lo señalado en su artículo 61, reglamentado por el Decreto 1420 de 1998, en el que se prevé que “el precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes”.***

Y si bien es cierto que la Ley 794 de 2003 dispuso en su artículo 24 que todo dictamen sería practicado por un solo perito, no lo es menos que esa norma únicamente modificó el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, que es de carácter general, pero no el artículo 456 de la misma codificación, que es de naturaleza especial.

2. Por consiguiente, como el juez de primer grado, para efectos del avalúo de que trata el artículo 456 del C.P.C., se limitó a designar un perito de la lista de auxiliares de la justicia, resulta incontestable que la peritación así obtenida no satisface los requerimientos legales, lo que no permite definir el precio de la cosa expropiada, ni de las indemnizaciones a que hubiere lugar.”
(se destaca por el Juzgado)

Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia T-638 de 2011 del M.P. Luis Ernesto Vargas Silva señaló:

“5.4. En este orden de ideas, la Sala de Revisión concluye que (i) las leyes 56 de 1981, 9ª de 1989 y 388 de 1997, son las disposiciones aplicables al trámite de adquisición de inmuebles destinados a obras públicas de acueducto, para lo cual, previo agotamiento de la etapa de enajenación voluntaria directa, se debe cumplir el proceso de expropiación por vía judicial que contempla los artículos 451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; (ii) para determinar el valor comercial del bien expropiado y la indemnización que se debe pagar a los interesados^[49], el juez civil debe aplicar la norma especial contemplada en el artículo 456 ibídem, la cual establece la designación de una pluralidad de peritos para que rindan el correspondiente dictamen pericial; (iii) siguiendo lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2265 de 1969, el artículo 21 de la Ley 56 de 1981 y el artículo 25 del Acuerdo 1518 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura, esa pluralidad de peritos hace referencia específica a dos auxiliares y por lo menos uno de ellos debe ser nombrado

³ Proceso de Expropiación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. contra Jorge Orlando Rodríguez Valcárcel y Jorge Orlando Rodríguez Valcárcel radicado bajo el número 41-2002-01249 M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez.

de la lista de peritos expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ello por cuanto dicho experto es conocedor de las normas, procedimientos, metodología, parámetros y criterios que se deben adoptar para la elaboración del avalúo comercial del bien objeto de la expropiación; y, (iv) si en el dictamen pericial los peritos aplican el método de comparación o de mercados, deben anexar a la experticia prueba del estudio de las ofertas o transacciones recientes de bienes semejantes y comparables al que es objeto del avalúo, pues no hacerlo compromete la precisión y claridad de la prueba pericial.”⁴ (se resalta por el Juzgado)

De lo que se advierte no debió haberse autorizado para que las partes aportaran un dictamen en los términos y bajo las disposiciones del artículo 226 del Código General del Proceso, tal y como se dispuso en el inciso final del auto fechado el 18 de octubre de 2019⁵.

Lo anterior por cuanto lo que debió haberse realizado, era emitir las decisiones pertinentes únicamente a fin de que tal experticia que determinara el valor de la indemnización a reconocer a favor de la demandada, se ejecutara bajo las reglas del Código de Procedimiento Civil y acatando lo sentado por la jurisprudencia sobre el tema, tal y como se les advirtió a las partes a través de providencia fechada el 6 de abril de 2017⁶, en la que se efectuó un control de legalidad sobre ese punto en concreto, y se efectuó la designación de un perito evaluador de la lista de auxiliares de la justicia, y otro integrante de la lista remitida en su oportunidad por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Pese a ello, tal y como se advierte de las determinaciones adoptadas a través de providencias fechadas el 3 de marzo de 2020⁷ y 22 de junio de 2021⁸, el Juzgado ha venido adoptando las determinaciones tendientes a que la experticia que se echa de menos en el litigio, se efectuó bajo los parámetros memorados en cumplimiento de lo resuelto por el *a quem* en su oportunidad, teniendo en cuenta en todo caso que a la fecha la lista de auxiliares de la justicia se encuentra deshabilitada, lo que conlleva a que sea el IGAC la entidad encargada de establecer el valor de la indemnización a reconocer a la demandada en los términos del artículo 61 de la Ley 388 de 1997⁹.

Ahora si en gracia de discusión viniere apropiada la decisión en punto a darle curso y trámite al dictamen pericial que la parte actora allegó al expediente el 13 de mayo pasado¹⁰, de una revisión acuciosa percata el Despacho que este no puede ser tenido en cuenta, ya que, no fue elaborado bajo de la citada disposición normativa, esto es por, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por peritos privados inscritos en las lonjas.

Por lo anterior, a fin de continuar con el trámite procesal correspondiente, el Juzgado **DISPONE:**

⁴ Referencia: expediente T-3008463. Acción de tutela instaurada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. contra el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá.

⁵ folio 742

⁶ Folio 627 a 634

⁷ Folio 746

⁸ Archivo digital No. 08

⁹ Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

¹⁰ Archivos digitales No. 11 y 12

1. No tener en cuenta conforme las razones dadas en la parte motiva de esta decisión, el dictamen pericial allegado por la parte demandada visible en los archivos digitales No. 11 y 12 del expediente digital.

2. Frente a la solicitud allegada por la apoderada de la parte actora el 24 de septiembre del año 2021 respecto a la elaboración de los oficios para la inscripción de la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria del bien objeto del litigio, deberá estarse a lo resuelto en el inciso final del auto que antecede¹¹, así como lo dispuesto en los numerales anteriores de esta providencia, donde en síntesis se indicó que una vez se encuentre acreditada la consignación de la indemnización y la entrega definitiva del predio, se resolvería sobre la inscripción de la sentencia.

3. En cuanto a la solicitud allegada por la extrema demandante en punto a que se oficie al Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, a efectos de que indique el valor de la experticia necesaria para continuar con el presente asunto, se le pone de presente que si bien revisando el expediente se observa que la demandante allego la documental que en su oportunidad el IGAC requirió a efectos de elaborar la experticia necesaria para darle curso al proceso el 13 de septiembre de 2019, esta tal y como se advirtió en autos del 6 de septiembre y 18 de octubre de 2019, y del 22 de junio de 2021, debe ser radicada de manera directa por la demandante como parte interesada en el litigio la institución en comento, diligencia de la cual a la fecha no hay evidencia dentro del plenario.

Por lo anterior, se requiere a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de esta ciudad E.S.P., para que en el término perentorio de 5 días contados a partir de la notificación por estado del presente proveído, allegue al expediente prueba que acredite dicho trámite. Lo anterior so pena de proceder a dar aplicación a las sanciones de que trata el artículo 44 *ib*, y emitir orden en punto a oficiar a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la demandante, así como al Ministerio Público a fin de que se dé inicio a las investigaciones a que haya lugar por desacato de las órdenes emitidas por esta instancia judicial tendientes a que se dé curso al proceso.

4. Sin perjuicio de lo anterior por Secretaría una vez la demandante acredite el requerimiento efectuado en el numeral anterior y *sin necesidad de que el expediente reingrese al Despacho*, ofíciase al Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, para que en el término de 5 días luego de recibida la respectiva comunicación, informe el costo del laborío que determine la indemnización a reconocer a la demandada Alcira Rodríguez Alfonso. Comunicación a la cual deberá adjuntar la constancia de que la demandante radicó ante esa entidad los documentos que aquella ha solicitado para la elaboración de la experticia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PILAR JIMENEZ ARDILA
JUEZ

¹¹ Archivo digital No.08

JST

Firmado Por:
Pilar Jimenez Ardila
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 050
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **33867caf53e4a4b37682fa5455a0083f33e279d8ffe0ed913fe0797a36394171**

Documento generado en 31/10/2022 04:27:09 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>